



Amenazas e intimidaciones al Padre Saravia

Desde octubre del año pasado hasta abril del 2004 el Padre **Horacio Saravia**, párroco del popular y tradicional barrio Alto Alberdi, en la ciudad de Córdoba, y Vicario episcopal para la **Pastoral Social**, ha sufrido una serie de intimidaciones y amenazas que han generado preocupación en sectores importantes de la sociedad cordobesa. No sólo hacia el interior de la Iglesia Católica, sino también en organizaciones sociales, sindicales y políticas que reconocen en el Padre Saravia una clara actitud de acompañamiento a los reclamos y problemas sociales.

LOS HECHOS

En el mes de octubre pasado la capilla del barrio Villa Páez, que pertenece a la parroquia del P. Saravia, sufrió las agresiones de personas aún no identificadas, que ingresaron en horas de la noche y cometieron todo tipo de destrozos. Floreros, armarios, crucifijos e imágenes de santos fueron destruidos. También el sagrario con hostias consagradas fue arrancado de la pared. Los ataques no tuvieron móviles de robo. La misma capilla fue intencionalmente incendiada,

aunque sin mayores consecuencias gracias a la rápida reacción del vecindario.

En los primeros meses de este año, cuando el sacerdote se disponía a ingresar a su casa, recibió una fuerte golpiza en la boca y en otras partes del cuerpo. Los agresores huyeron enseguida llevándose el auto del que acababa de bajarse el cura. Tampoco esta vez el móvil fue el robo, ya que nada le sustrajeron y el auto fue encontrado a las pocas horas en una playa de estacionamiento.

Poco después de este hecho, recibió por correo electrónico varias amenazas con el único mensaje de que cuidara su boca y se retirara de la Pastoral Social. A los pocos días fue víctima de otra clara intimidación: cuando en horas de la noche se disponía a asistir a un enfermo, al salir de la parroquia en compañía de otra persona, se percató de que un auto que estaba estacionado pocos metros más atrás, sin las luces encendidas, inició también su marcha. Sospechando de las circunstancias, el cura detuvo su vehículo para permitir que el auto que lo seguía continuara su camino. Pero éste también se de-

tuvo. Fue entonces que el P. Saravia aceleró su marcha para despejarse de la persecución y al llegar a la intersección de la calle, apareció otro vehículo a marcha lenta que intentó obstaculizarle el paso, cosa que resultó infructuosa por la rápida maniobra del sacerdote que estacionó a pocas cuadras, refugiándose en la casa de unos vecinos que a esa hora estaban despiertos viendo televisión.

LOS MOTIVOS

La actividad del P. Saravia es vastamente conocida en Córdoba. De ascendencia aborigen, impulsó con fuerza la valorización de sus orígenes creando el **Instituto de Cultura Aborigen**, que funciona en Alto Alberdi. Con la llegada al Arzobispado de Córdoba de Mons. **Carlos Nández**, Saravia, profesor de Historia de la Iglesia en el Seminario Mayor, fue designado para estar al frente de la Pastoral Social, donde marcó una línea de compromiso con los conflictos sociales. Y aunque, siguiendo las directivas del Arzobispo, afirme que el rol la Iglesia no es la mediación, la intervención de la Pastoral Social ha sido requerida por los sec-

tores gremiales o sociales más postergados cada vez que han sufrido la agresión de las políticas oficiales. Estuvo frente a la comisaría tercera cuando fueron detenidos más de 200 trabajadores del gremio de **Luz y Fuerza** en su lucha contra la privatización. Celebró misa junto a la carpa de las esposas de los choferes de las empresas de transporte urbano cuando quedaron sin sus puestos laborales. Estuvo junto a los pequeños y medianos empresarios cuando el intendente **Kammerath** adoptó medidas adversas en el Mercado Sud de la ciudad. Nos acompañó en los Tribunales cuando el Gobernador **De la Sota** nos inició una querrela por calumnias e injurias a raíz de una nota periodística de rechazo a la privatización del Banco de Córdoba. Se solidarizó con su presencia y se dirigió por nota a la Ministro de Educación con una postura nítida de defensa a los delegados y empleados de ese ministerio cuando fueron compulsivamente trasladados luego de reclamar un aumento salarial. Acompañó a los trabajadores municipales en su reclamo de justicia ante el asesinato, aún impune, del inspector municipal **Benjamín Gauna**.

Atendiendo a las consecuencias sociales del desempleo, la Pastoral Social tuvo un contundente pronunciamiento en contra de las privatizaciones que impulsó el gobernador De la Sota, tanto del juego como del banco estatal y la empresa de energía eléctrica. En el caso del juego además la cuestionó por los entornos de corrupción y envilecimiento que acarrea la actividad. La pública reacción descalificatoria por parte del gobernador no se hizo esperar, y el Arzobispo, aunque en forma cautelosa, respaldó la postura de Saravia.

Atacando el clientelismo político en la ayuda social, como miembro del Consejo Consultivo, la Pastoral Social denunció los desmanejos en la administración de los planes para jefes y jefas de familia. Además del gobierno provincial, algunas or-

ganizaciones de desocupados, cuyos dirigentes han desvirtuado sus funciones hasta límites rayanos en la corrupción exigiendo "aportes voluntarios" para los gastos administrativos, también se sintieron molestos con la postura de la Pastoral Social, que terminó abandonando el Consejo Consultivo durante la gestión del intendente Kammerath.

LAS REACCIONES

Aunque los hechos a medida que sucedieron fueron denunciados en distintas fiscalías de los tribunales judiciales, nada se avanzó en las investigaciones. Las sospechas sobre el origen de las intimidaciones y amenazas han caído mayoritariamente sobre el gobierno provincial que mantuvo un silencio sepulcral. Es que el P. Saravia, por sus definiciones políticas y sus actitudes de respaldo a los sectores más necesitados, ha quedado identificado como la voz opositora al gobierno de mayor jerarquía en la iglesia de Córdoba. Quizás haya sobresalido más al contrastar con la postura más cautelosa de los demás estamentos de la jerarquía eclesiástica local.

Sólo trascendió algo de preocupación oficial a principios de mayo, luego de que el Arzobispo se entrevistara con el gobernador José Manuel De la Sota para plantear la gravedad del caso y la preocupación por la falta de seguridad para el sacerdote amenazado. Aunque no resultó creíble, el gobernador le habría manifestado desconocer la situación, y luego de la entrevista dispuso que se asignara custodia policial al P. Saravia y ordenó al fiscal general intervenir ante las denuncias paralizadas en la justicia. Pero el silencio no fue sólo del gobierno. Aunque Saravia recibió en forma personal la visita de solidaridad del Arzobispo, no hubo un pronunciamiento público de la Iglesia de Córdoba. El tema fue considerado en la reunión del Consejo Presbiterial, pero triunfaron las posturas extremadamente mode-

radas que prefirieron diferir la denuncia pública para evitar un nuevo choque de la iglesia con el gobierno provincial, en momentos en que el gobernador De la Sota se enfrenta con el presidente Kirchner incluso por el tema de la seguridad, una de las banderas que el gobernador cordobés pretendió exhibir ante las falencias nacionales agigantadas en torno al caso Blumberg. Que Córdoba aparezca insegura por la denuncia de la iglesia ante la inacción policial y judicial por el "caso" Saravia, haría rebrotar la soberbia del gobernador De la Sota, que no trepidaría en descalificarla politizando interesadamente la cuestión. Ese fue el razonamiento que definió la postura eclesiástica por el silencio.

Más allá de esta circunstancia, no nos parece correcto el camino elegido por la jerarquía cordobesa. La iglesia argentina sufre todavía hoy el descrédito social por aquel silencio de los tiempos dictatoriales, que quedó sospechado de complicidad. En estos casos, nunca el silencio es salud. Y lamentar después lo peor no remedia nada. En este caso como en otras causas judiciales que no terminan de esclarecerse en Córdoba, el reclamo de justicia debe ser contundente y público. Precisamente para remediar la inseguridad y evitar males mayores que deterioren la credibilidad social en las instituciones democráticas.

Distinta fue la actitud de la feligresía parroquial de Alto Alberdi que realizó una marcha por las calles del barrio para solidarizarse con su párroco y reclamar el esclarecimiento de los hechos. Otros sectores cristianos, sindicales y sociales se pronunciaron en igual sentido. Y legisladores provinciales del Partido Nuevo que lidera el intendente **Luis Juez**, plantearon una interpección al Ministro de Seguridad **Carlos Alesandri**. Este es el primer capítulo. La historia sigue abierta. ¡Ojalá otras voces ayuden a escribirla!

Vitín Baronetto